



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores
Presidencia

La Paz, 12 de abril de 2023
P.I.E. N° 624/2022-2023



Señor:

Luis Fernando Camacho Vaca

GOBERNADOR

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

Santa Cruz. -

Señor Gobernador:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, párrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada por la Senadora Paola Fernández Rea, para que su Autoridad, responda el cuestionario y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento, el cual a la letra dice:

“1. Informe si la institución a su cargo ha elaborado un Plan de Acción para hacer frente a la epidemia de Dengue que afecta al Departamento de Santa Cruz. De ser afirmativa su respuesta, remita copia del mismo e indique cuáles son los objetivos, metas, indicadores y presupuesto. De ser negativa su respuesta, indique bajo qué acciones se ha planificado y ejecutado hasta la fecha, asimismo, si se ha proyectado las acciones a seguir para hacer frente a dicha epidemia. --- 2. Informe qué acciones y medidas tanto preventivas como de acción viene ejecutando la institución a su cargo, para hacer frente a la epidemia Dengue que afecta al Departamento de Santa Cruz. --- 3. Informe cuántos y qué hospitales de tercer nivel se encuentran habilitados y equipados con los equipos de terapia intensiva, aptos para atender a pacientes con Dengue. --- 4. Informe qué acciones viene realizando ante el colapso de centros hospitalarios por la epidemia de Dengue que afecta a nuestro Departamento. --- 5. Informe si los hospitales de tercer nivel cuentan con los respectivos medicamentos e insumos de atención básica para el tratamiento de Dengue. Detalle la cantidad existente y cuál sería la asignación respectiva a cada hospital. --- 6. Informe qué acciones ha planificado y coordinado con el nivel central del Estado y con los Gobiernos Autónomos Municipales para hacer frente a la epidemia de Dengue que afecta al Departamento de Santa Cruz. --- 7. Informe a cuánto alcanza el presupuesto asignado y ejecutado por el SEDES-Santa Cruz para la lucha contra la epidemia de Dengue; cómo se financia el mismo, al efecto documente su respuesta.”

Con este motivo, reiteramos al señor Gobernador nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. Andrés Rodríguez Ledezma

PRESIDENTE

CÁMARA DE SENADORES

SENADORA SECRETARIA
Sen. Claudia Elena Espíñez Algarrañaz
SEGUNDA SECRETARIA
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLÉA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

GADSC/DESPACHO/OF. N° 439/2023

Recinto Penitenciario San Pedro de Chonchocoro del Departamento de La Paz, 04 de mayo de 2023.

Cod. Seg. 29395-2023

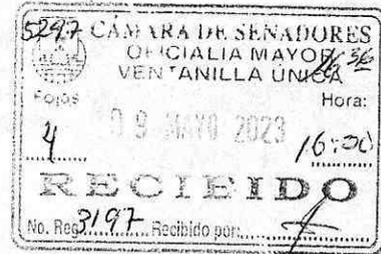
Señor:

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma

Pdte. Cámara de Senadores

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

La Paz.-



REF.- RESPUESTA A P.I.E. N° 624/2022-2023.-

De mi consideración:

En atención a lo planteado en la P.I.E. de referencia, mediante el presente tengo a bien remitir el Informe Legal IL SJ SJD DAC 031 2023 MVRJ de fecha 26 de abril de 2023 efectuado por la Unidad Jurídica del G.A.D.S.C., en virtud del cual se da respuesta a la solicitud de información antes señalada.

Se adjunta Informe Legal IL SJ SJD DAC 031 2023 MVRJ.

Sin otro particular, me despido con las consideraciones del caso.

Atentamente.




Luis Fernando Camacho Vaca
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

CC/Archivo



SCZ

Gobierno
Autónomo
Departamental
Santa Cruz

Av. Omar Chávez, Esq. Pozo
Telf. Of.: (591 - 3) 3636000 - 3636001
www.santacruz.gob.bo

IL SJ SJD DAC 031 2023 MVRJ
Santa Cruz, 26 de abril de 2023
Cod. Seg. 29395-2023

INFORME LEGAL

A : Luis Fernando Camacho Vaca
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.

CC : Edil Enrique Toledo Avalos
SECRETARIO DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO.

CC : Eliana Peña Antony
ASESORÍA GENERAL.

VÍA : José Luis Terrazas Chulver
SECRETARIO DE JUSTICIA.

VÍA : Betty Carolina Ortuste Tellería
DIRECTORA DEL SERVICIO JURÍDICO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ.

VÍA : Vanessa Egüez Añez
DIRECTORA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS.

DE : María Valeria Roca Jaramillo
PROFESIONAL 3 – DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS.

REF. : **INFORME LEGAL SOBRE PIE N° 624/2022-2023 QUE SOLICITA EL SENADOR ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA. -**



[Signature]
SECRETARÍA DE JUSTICIA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ

[Signature]
Betty Carolina Ortuste Tellería
DIRECTORA DE SERVICIO JURÍDICO DPTAL.
SECRETARÍA DE JUSTICIA
GOBIERNO AUTÓNOMO DPTAL. DE SANTA CRUZ

[Signature]
Abg. Vanessa Egüez Añez
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DPTAL. DE SANTA CRUZ
R.P.A. 6232400 VEA

I. ANTECEDENTES. -

1.1. Mediante CITE: PIE N° 624/2022 – 2023 recibida el 21 de abril de 2023, a requerimiento de la **Senadora Paola Fernández Rea**, solicita mediante el Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma, dar respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 624/2022-2023, siendo así que bajo el estamento de **FISCALIZAR** “de conformidad a lo dispuesto por numeral 17, párrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores (...) solicita dar respuesta en el plazo de quince días hábiles según art. 143 del mencionado Reglamento, al cuestionario que a la letra dice:

1. Informe si la institución a su cargo ha elaborado un Plan de Acción para hacer frente a la epidemia de Dengue que afecta al Departamento de Santa Cruz. De ser afirmativa su respuesta, remita copia del mismo e indique cuáles son los objetivos, metas, indicadores y presupuesto. De ser negativa su respuesta, indique bajo qué acciones se ha planificado y ejecutado hasta la fecha, asimismo, si se ha proyectado las acciones a seguir para hacer frente a dicha epidemia.
2. Informe qué acciones y medidas tanto preventivas como de acción viene ejecutando la institución a su cargo, para hacer frente a la epidemia Dengue que afecta al Departamento de Santa Cruz.
3. Informe cuántos y qué hospitales de tercer nivel se encuentran habilitados y equipados con los equipos de terapia intensiva, aptos para atender a pacientes con Dengue.
4. Informe qué acciones viene realizando ante el colapso de centros hospitalarios por la epidemia

de Dengue que afecta a nuestro Departamento.

5. Informe si los hospitales de tercer nivel cuentan con los respectivos medicamentos e insumos de atención básica para el tratamiento de Dengue. Detalle la cantidad existente y cuál sería la asignación respectiva a cada hospital.

6. Informe qué acciones ha planificado y coordinado con el nivel central del Estado y con los Gobiernos Autónomos Municipales para hacer frente a la epidemia de Dengue que afecta al Departamento de Santa Cruz.

7. Informe a cuánto alcanza el presupuesto asignado y ejecutado por el SEDES-Santa Cruz para la lucha contra la epidemia de Dengue; cómo se financia el mismo, al efecto documente su respuesta.”

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. -

2.1. DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y JERARQUÍA NORMATIVA. -

La Constitución Política del Estado, como Norma Suprema del ordenamiento jurídico y de aplicación preferente con relación a cualquier otra normativa en el territorio nacional de conformidad al art. 410-II de la misma normativa. Se encuentran formando parte del bloque de constitucionalidad integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y Normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país.

Aclara el mismo precepto que la aplicación de normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

- 1.- Constitución Política del Estado.
- 2.- Los tratados internacionales.
- 3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena.
- 4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

Bajo este contexto normativo, la jurisprudencia prevista en la **Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2055/2012, de 16 de octubre de 2012**, ha distinguido las siguientes categorías de leyes de acuerdo al orden constitucional:

Bajo el nuevo régimen del proceso autonómico, y concretamente del texto constitucional se advierte una nueva tipología de las leyes que merece una referencia para el análisis del juicio de constitucionalidad, la misma que se extrae del análisis sistémico de la Constitución:

En efecto, la Constitución hace referencia a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, conforme se infiere de su artículo 271. A su vez el artículo 275, hace referencia a los estatutos y cartas orgánicas como normas institucionales básicas de las entidades territoriales, y el párrafo I del artículo 297, se refiere a la legislación básica y la legislación de desarrollo como parte del ejercicio del tipo de competencia compartida, y finalmente el artículo 410.II de la misma Norma Suprema se refiere a las leyes nacionales, legislación departamental, municipal e indígena.

De lo precedentemente señalado, se establece la siguiente tipología constitucional en virtud del nuevo régimen autonómico:

Norma Fundamental o Suprema (artículo 410 de la CPE).

Ley marco (artículo 271 de la CPE).

Leyes nacionales (artículo 410 de la CPE).

Normas institucionales básicas (estatutos y cartas orgánicas artículo 245 de la CPE).

Legislación básica y legislación de desarrollo, como parte del ejercicio del tipo de competencia compartida (artículo 297.I.4 de la CPE).

Legislación departamental, municipal e indígena (arts. 297.I.2 y 410.II de la CPE).¹

¹ SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2055/2012, de 16 de octubre de 2012. Sucre-Bolivia.

Esta ordenación normativa pone de manifiesto la existencia de grados y jerarquías, que inciden en la aplicación prevalente de las normas jurídicas, cuya cúspide dentro la “pirámide jurídica” Kelseniana, corresponde a la Constitución, así como a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y Normas de Derecho Comunitario que forman parte del bloque de constitucionalidad, salvo lo dispuesto en el artículo 256-I de la CPE. Luego, le siguen los demás tratados internacionales –que no versan en materia de derechos humanos– por los compromisos o acuerdos asumidos por nuestro Estado frente a sus pares en la comunidad internacional que gozan de un grado preferente respecto de las leyes.

En cuanto a las leyes *en sentido formal* provenientes de los órganos legislativos de los diferentes niveles gubernativos, doctrinalmente se las concibe como “normas sustantivas” porque dentro de su contenido usualmente se crean, modifican o suprimen de derechos y obligaciones con alcance general. Finalmente, se tienen las leyes *en sentido material* procedentes de los Órganos Ejecutivos y que suelen pertenecer a la categoría de “normas adjetivas” por estar dirigidas a regular los procedimientos o trámites que permiten hacer efectivo el ejercicio de derechos y ejecutar los contenidos de las leyes formales, aunque en este último caso, por la vía de excepción podrán provenir de Órganos Legislativos para normar su composición, operatividad o funcionamiento.

Justamente en este último rango jerárquico se ubican tanto el Reglamento General tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, pues pese a tratarse de normas jurídicas provenientes de órganos legislativos en ninguna forma son equiparables a las leyes formales, pues lejos de crear, modificar o suprimir derechos y obligaciones, su objetivo es regular la organización y funciones de cada una de las Cámaras conforme se desprende numeral 1) en concordancia con el artículo 159 y numeral 1) del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, quedando esclarecido por el artículo 158-II de la misma Constitución que la organización y funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regirá por el Reglamento de la Cámara de Diputados.

En ese orden de ideas resulta evidente que los Reglamentos de las Cámaras que integran la Asamblea Legislativa Plurinacional en ninguna manera podrían contravenir los contenidos de una Ley por encontrarse en un grado jerárquicamente inferior y menos aún entrar en franca contradicción con los contenidos de la Norma Constitucional, bajo pena de ser tachados de total o parcialmente de “inconstitucionales” y por ende, depurados o expulsados del ordenamiento jurídico vigente, como resultado de un control de constitucionalidad posterior mediante la interposición de una acción de inconstitucionalidad abstracta.

Por lo que mal podría el Reglamento General de la Cámara de Senadores arrogarse dentro del artículo 141 el ejercicio de la potestad fiscalizadora sobre las entidades territoriales autónomas, toda vez que tanto la Constitución y las Leyes establecen que este accionar únicamente recae sobre las Órganos del Estado y las instituciones públicas “nacionales”, puesto conforme al art. 12 de la CPE concordante con el art. 12 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización, para el control cruzado y división de funciones, cada gobierno autónomo cuenta dentro de su estructura con su respectivo Órgano deliberativo, legislativo y “fiscalizador” sobre la gestión de su Órgano Ejecutivo (arts. 277, 281, 283 y 290 CPE), activando al efecto sus propios instrumentos de fiscalización previstos en su régimen jurídico autónómico.

2.2. DEL ALCANCE DE LA POTESTAD FISCALIZADORA. -

Fiscalizar significa examinar una actividad o conjunto de acciones de una entidad o de una persona para comprobar si cumple la normativa vigente. La fiscalización es definida por la Real Academia Española como la “Acción de fiscalizar, esto es, vigilar con ánimo crítico”. Esta facultad corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre Ejecutivo Nacional y al Órgano Legislativo de Entidades Territoriales Autónomas (ETA's) sobre la gestión pública y el manejo de los recursos de sus respectivos Órganos Ejecutivos.

La Sentencia Constitucional Plurinacional SCP N° 2055/2012, del 16 de octubre de 2012, expresa que: "(...) De acuerdo con la Constitución la competencia puede ser privativa, exclusiva, concurrente y compartida (art. 297 de la CPE), y conforme se infiere del diseño constitucional efectuado para las diferentes autonomías (arts. 272, 298 y ss. de la CPE), el **ejercicio competencial se desarrolla a partir de tres ámbitos de identificación:** i) El ámbito jurisdiccional; ii) El ámbito material; y, iii) **El ámbito facultativo.**"

Particularmente, el ámbito facultativo, recae en los órganos ejecutivos y legislativos de los niveles de gobierno. De acuerdo con la Constitución, son cinco facultades mediante las cuales ejercerán sus atribuciones: facultad legislativa, reglamentaria, ejecutiva, deliberativa y fiscalizadora. Las facultades deliberativa, **fiscalizadora** y legislativa son de titularidad de los órganos deliberativos. En tanto, que las otras dos facultades: reglamentaria y ejecutiva, son de titularidad de los órganos ejecutivos.

Sobre el alcance de la facultad fiscalizadora, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha expresado en la **Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1714/2012, de 01 de octubre de 2012**, la siguiente línea jurisprudencial:

"(...) **4. Facultad fiscalizadora.** Esta facultad se encuentra introducida por el art. 272 de la CPE, cuando confiere a los gobiernos autónomos las facultades legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora. **Esta facultad TRATÁNDOSE DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES CORRESPONDE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO CORRESPONDIENTE PARA CONTROLAR AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL MISMO. Así en la autonomía departamental es ejercida por la asamblea departamental respecto del órgano ejecutivo en la gestión pública y el manejo de los recursos departamentales.**"

La facultad fiscalizadora se inicia en la gestión legislativa para corregir algunas ausencias en el órgano ejecutivo o ejercer seguimiento a la ejecución de las obras, además de contribuir en la labor de orientar el manejo responsable de las herramientas técnico-operativas y los procedimientos normativos para la transparencia municipal. La normativa ordena la labor de los senadores, diputados, asambleístas o concejales en su misión de fiscalizar la gestión y el manejo de los recursos públicos programados en el Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto Institucional, incluyendo su Programa Anual de Contrataciones, como mecanismos de transparencia de la inversión pública y el gasto corriente.

Por tanto, dicha facultad corresponde al órgano legislativo de las ETA's sobre la gestión pública y el manejo de los recursos de sus respectivos Órganos Ejecutivos y recae principalmente sobre dos ámbitos:

- a) Busca comprobar si acciones sometidas a escrutinio se ajustan a principios legalidad, eficiencia y transparencia. Se fiscaliza para evitar y/o sancionar corrupción pública.
- b) Contratos y Convenios, cuya naturaleza o cuantía comprometan recursos estratégicos o institucionales, esté vinculada al ámbito de incumbencia única y propia del órgano legislativo y/o tengan ejecución plurianual (Declaración Constitucional Plurinacional DCP N° 01/2013 del 12 de marzo de 2013 y DCP 061/2018, de 29 de agosto de 2018)

¿Por qué y para qué se fiscaliza? Para evitar y/o sancionar corrupción pública, ante el conocimiento de decisiones estatales arbitrarias, para corregir acciones estatales violatorias de derechos y ante el incumplimiento de obligaciones de servidores públicos.

Por su parte, la **Declaración Constitucional Plurinacional N° 001/2013 del 12 de marzo del 2013**, ha explicado lo siguiente:

"(...) Reafirmando el postulado constitucional, específicamente en referencia a la forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas, el art. 12.III de la LMAD dice que **"Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí"** (las negrillas son nuestras).

IL SJ SJD DAC 031 2023 MVRJ

Santa Cruz, 26 de abril de 2023

Cod. Seg. 29395-2023

En el marco de los análisis precedentes, referentes a la separación de funciones y facultades de los órganos de poder público, y el mandato de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización sobre que las funciones de los órganos son indelegables, el Concejo Municipal –en el caso concreto, la Asamblea Departamental– debe ejercer la facultad fiscalizadora de la cual es titular, de manera directa y sin intermediarios (...)

En ese nuevo contexto, y en el marco de la facultad fiscalizadora que el Concejo Municipal puede ejercer sobre cualquier acto del órgano ejecutivo (...) Los concejos municipales tienen el mandato de ejercer su facultad fiscalizadora, EN EL MARCO DE LA SEPARACIÓN DE ÓRGANOS, lo que implica diseñar el marco normativo e instrumentos necesarios a fin de que se substancien y canalicen los procesos a las instancias correspondientes. (...)

Ahora bien, la fiscalización tiene un ámbito muy amplio que no se circunscribe únicamente a la petición de informes orales o escritos, ni tampoco a la interpelación de funcionarios o autoridades del órgano ejecutivo, cuestiones que si son solicitadas a través de la máxima autoridad ejecutiva como es el Alcalde, lo cual es correcto. Pero se debe señalar que la facultad fiscalizadora tiene un espectro más amplio que implica la fiscalización política, administrativa, social y de otros ámbitos no necesariamente deben realizarse a través del Alcalde". Tal es el caso de la fiscalización de los actos de la función pública según el art. 26-II núm. 5 de la CPE.

Son **instrumentos de fiscalización** las Interpelaciones, Investigaciones parlamentarias, Peticiones de informes escritos y orales, Minutas de comunicación (*Es más bien un instrumento de gestión, recomendaciones al Ejecutivo*). Otras **acciones de fiscalización**, son las acciones de "autorizar, aprobar y/o ratificar" ciertos actos, convenios o contratos administrativos.

2.3. DE LA FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL.

La Ley Fundamental prevé que la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene atribución para el control y fiscalización de los órganos del Estado e instituciones públicas, de conformidad al Artículo 158, parágrafo I, numeral 17 de la misma Constitución.

Sin embargo, de acuerdo al nuevo modelo autonómico de Estado previsto específicamente en el Art. 1 y transversalmente en toda la Constitución, es menester aclarar que dicha facultad debe ser ejercida en el marco del modelo de Estado que tenemos adoptado y de ninguna manera deberá ser invasiva, ni superpuesta a las facultades que correspondan a los Órganos Legislativos de los demás niveles de Gobierno, lo que significaría des-configurar e incumplir el mandato constitucional previsto en el Art. 1, 269, 270, 272, 277 y siguientes de la Norma Fundamental, bajo pena de viciar sus actos de nulidad en los términos descritos en el artículo 122 de la Ley Fundamental que textualmente refiere: "*Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley*".

Es la Constitución Política la que desarrolla este modelo de Estado, distribuyendo el poder en diversos niveles de gobierno, de manera que, si bien es evidente que dentro del Estado Boliviano existe un nivel central de gobierno, no es menos cierto que no todas las competencias y responsabilidades serán ejercidas únicamente por éste nivel, sino también por otros niveles de Gobierno: Departamentales, Municipales, Regionales o de los Pueblos Originarios Indígenas Campesinos.

Estos últimos, que son a su vez denominados como "entidades territoriales autónomas", las cuales deberán actuar y ejercer las facultades sobre las diferentes materias en las que recae el ámbito de sus competencias y en función al territorio que gobiernan, respetando los límites establecidos en la Constitución y las Leyes, límites que el nivel central de gobierno está igualmente obligado a cumplir y obedecer.

Del mismo modo, a los Órganos que integran las Entidades Territoriales Autónomas (Departamentales, Municipales, Regionales o de los Pueblos Originarios Indígenas Campesinos), les está proscrito adentrarse y apropiarse de facultades previstas para el nivel central y/u otros niveles distintos al Gobierno que se trate.



Este modelo de Estado constitucionalmente diseñado, regula entonces, una distribución del poder bajo criterios de una lista competencial diferenciada territorial y políticamente. Lo que significa que los distintos niveles pueden tener las mismas facultades (legislativa, fiscalizadora, reglamentaria y de ejecución), pero que serán ejercidas de acuerdo a la materia y al territorio.

Es así, que el nivel central de gobierno con facultad fiscalizadora (ALP) puede fiscalizar a las entidades que ejercen o ejecutan materias previstas específicamente para el nivel central y que sean territorialmente de alcance nacional. Sin embargo, no puede adentrarse a fiscalizar a una entidad que de acuerdo a la materia competencial que ostenta, está vinculada territorialmente a un nivel distinto del nivel central de gobierno.

Lo que significa, por ejemplo, que la ALP no puede fiscalizar un contrato de licitación realizado por el Órgano Ejecutivo de la alcaldía del municipio de Punata, pues le quitaría de sentido que dicho Gobierno Municipal tenga constitucionalmente asignada a favor de su Órgano Deliberante y Fiscalizador, como es el Concejo Municipal, dicha facultad fiscalizadora. A *contrario sensu*, el Concejo Municipal del Municipio de Punata, no puede fiscalizar un contrato de licitación efectuado por YPF, que es de alcance nacional, por tanto, a tuición fiscalizadora de la ALP. Todo ello sin perjuicio del control gubernamental que ejerce la Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoría de las entidades en todos los niveles del Estado.

Vinculado a lo anterior, tenemos que el art. 158-II de la mentada Constitución, refiere que la organización y funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regularán por el Reglamento General de la Cámara de Diputados, el cual contempla dentro de la variedad de acciones de fiscalización a las peticiones de informes: oral y escrito (Arts. 135 y 139). Empero, durante el ejercicio de la potestad de Fiscalización, la Cámara que preside no ha tomado en cuenta que dichas disposiciones al presente son contrarias a la autonomía reconocida constitucionalmente a favor de las Entidades Territoriales Autónomas en los términos definidos en el artículo 272 de la Carta Magna, concordante con el artículo 6-II, numeral 3) de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización.

Pues el Reglamento antes referido no puede desconocer la autonomía de los demás niveles de gobierno; y en el caso de los Gobiernos Autónomos Departamentales, las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado en su artículo 277, al establecer que: *“El gobierno autónomo departamental está constituido por una **Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora** y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo”*.

Al expresar dicho articulado del texto constitucional que la Asamblea Legislativa Departamental **tiene facultad fiscalizadora**, quiere decir que la facultad de fiscalización al Órgano Ejecutivo Departamental a través de su Máxima Autoridad Ejecutiva, **debe ser ejercida por el Órgano Legislativo Departamental** y no así por la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues esto constituiría una flagrante vulneración al régimen autonómico reconocido y garantizado constitucionalmente, el cual debe ser respetado por todos los niveles de gobierno.

De ahí que, la facultad fiscalizadora prevista en el Art. 158-I, numeral 17) de la CPE, y atribuida a la Asamblea Legislativa Plurinacional, no deberá ser interpretada de manera aislada y sesgada del resto del texto constitucional, respetándose las facultades de fiscalización conferidas a los Órganos Legislativos de las Entidades Territoriales Autónomas.

Lo anterior guarda concordancia con el artículo 137 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización que a la letra dice: *“(FISCALIZACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL). I. La fiscalización a los órganos ejecutivos es EJERCIDA POR LOS ÓRGANOS DELIBERATIVOS DE CADA GOBIERNO AUTÓNOMO (...)”*, el cual ha sido declarado constitucional mediante Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2055/2012 de 16 de octubre del 2012.

Consecuentemente, la **Petición de Informe Escrito** requerida por la Senadora Paola Fernández Rea es invasiva a la autonomía del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, y vulnera la facultad fiscalizadora que debe ejercer la Asamblea Legislativa Departamental a su Órgano Ejecutivo conforme lo establece la Constitución Política del Estado, el artículo 137-I de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización y la

IL SJ SJD DAC 031 2023 MVRJ

Santa Cruz, 26 de abril de 2023

Cod. Seg. 29395-2023

línea jurisprudencial antes glosada; y en forma ninguna se basa en normativa autonómica que se haya emitido con la única finalidad de impedir el ejercicio de la fiscalización y control gubernamental.

En tal sentido, el criterio e interpretativo de la Constitución y las leyes, no responde a juicio discrecional y antojadizo vertido por parte de servidores del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, pues por el contrario se basa en todo tiempo en la jurisprudencia constitucional glosada por el máximo intérprete de la Norma Suprema del Ordenamiento Jurídico, considerando que por mandato del artículo 203 de la Ley Fundamental, las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y su cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.

Corroborar lo antedicho, el art. 15 del Código Procesal Constitucional que a la letra dice:

“(CARÁCTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIA DE LAS SENTENCIAS). I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. 5 II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.”

Por ende, la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional citada líneas arriba resulta vinculante al Órgano Legislativo del nivel central del Estado, incluyendo a su Autoridad como parte integrante del mismo, debiendo darse estricto cumplimiento a la misma y tenerse presente para lo venidero.

III. CONCLUSIONES. -

De lo expresado, analizado y fundamentado anteriormente, se concluye lo siguiente:

3.1 La Constitución Política del Estado, como Norma Suprema del ordenamiento jurídico y de aplicación preferente con relación a cualquier otra normativa en el territorio nacional de conformidad al art. 410-II de la misma normativa, prevé que la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene atribución para el control y fiscalización de los órganos del Estado e instituciones públicas, de conformidad al Artículo 158, parágrafo I, numeral 17 de la misma Constitución.

3.2 El art. 158-II de la mentada Constitución, refiere que la organización y funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regularán por el Reglamento General de la Cámara de Diputados, el cual contempla dentro de la variedad de acciones de fiscalización a las peticiones de informes: oral y escrito (Arts. 135 y 139). Empero, durante el ejercicio de la potestad de Fiscalización, la Cámara que preside no ha tomado en cuenta que dichas disposiciones al presente son contrarias a la autonomía reconocida constitucionalmente a favor de las Entidades Territoriales Autónomas en los términos definidos en el artículo 272 de la Carta Magna, concordante con el artículo 6-II, numeral 3) de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización.

Pues el Reglamento antes referido no puede desconocer la autonomía de los demás niveles de gobierno; y en el caso de los Gobiernos Autónomos Departamentales, las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado en su artículo 277, al establecer que: *“El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo.*

3.3 El artículo 137 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización que a la letra dice: ***“(FISCALIZACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL). I. La fiscalización a los órganos ejecutivos es EJERCIDA POR LOS ÓRGANOS DELIBERATIVOS DE CADA GOBIERNO AUTÓNOMO (...)***”, el cual ha sido declarado constitucional mediante Sentencia Constitucional N° 1714/2012, de 01 de octubre y Sentencia Constitucional 2055/2012 de 16 de octubre del 2012.



IL SJ SJD DAC 031 2023 MVRJ

Santa Cruz, 26 de abril de 2023

Cod. Seg. 29395-2023

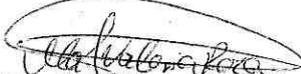
3.4 La Petición de Informe Escrita requerida por la Senadora Paola Fernández Rea, es invasiva a la autonomía del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, y vulnera la facultad fiscalizadora que debe ejercer la Asamblea Legislativa Departamental a su Órgano Ejecutivo conforme lo establece la Constitución Política del Estado, el artículo 137-I de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización y la línea jurisprudencial antes glosada.

IV.- RECOMENDACIONES. -

4.1 Que, el Gobernador del Departamento de Santa Cruz, en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, en merito a lo anteriormente expuesto de respuesta a las autoridades peticionantes a efectos de no vulnerar la Autonomía Departamental, en resguardo de la facultad fiscalizadora que debe ejercer la Asamblea Legislativa Departamental, **EXHORTE a la Cámara de Senadores a adecuar su Reglamento General y consiguiente ejercicio de su potestad fiscalizadora -que incluye la petición de Informe Escrito-** en forma compatible con el marco constitucional, legal y jurisprudencial antes descrito, siguiendo los principios de "Supremacía Constitucional", "Jerarquía Normativa" y "Lealtad Institucional" que debe primar entre niveles de gobierno, en estricto apego de los arts. 270 y 410 de la Ley Fundamental, concordante con el art. 5 núm. 15) de la LMAD.

4.2. Finalmente, se acompaña a los fines consiguientes el proyecto de oficio en borrador, tanto en formato físico como digital para su respectiva revisión y firma de la MAE.

Es todo cuanto informo para los fines consiguientes.


María Valeria Roca Jaramillo
PROFESIONAL III
DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DPTAL. DE SANTA CRUZ

CC: Archivo,
ADJ. Antecedentes.
CD. proyecto de oficio.